

El cambio de élites en Venezuela durante la primera etapa de la Revolución Bolivariana

Álvaro García-Mayoral

Universidad Complutense de Madrid (España)  

<https://dx.doi.org/10.5209/poso.80976>

Envío 14 marzo 2022 / Aceptación 13 septiembre 2023

Resumen: El cambio político que se produjo en Venezuela al calor de la Revolución Bolivariana trajo consigo una modificación en la correlación de fuerzas y en la forma en la que se configuraban las élites del país, surgiendo nuevos grupos de poder que alteraron la estructura del estado, entrando en conflicto directo con las corporaciones hegemónicas del periodo político anterior. Por medio de la Asamblea Constituyente y de la mano de toda una operación institucional, el chavismo consiguió debilitar a los partidos políticos del bipartidismo elitista para posteriormente impulsar el crecimiento de empresas y corporaciones que presentaran una línea de acción acorde al proyecto bolivariano. Desde una retórica populista de carácter antagónico, Chávez fue capaz de construir un sujeto pueblo que se contraponía al proyecto de las élites, asumiendo así los riesgos propios de este tipo de discurso; la extrema polarización social y la tendencia hacia el hiperliderazgo personalista. El trabajo pretende realizar una revisión de las estructuras tradicionales de la democracia previa al chavismo, y de qué manera se pretendieron articular unas nuevas élites y movimientos sociales que tuvieron como objetivo construir una democracia protagónica que tomara distancia de las clásicas estructuras liberales.

Palabras clave: Venezuela; chavismo; élites; populismo; estado; América Latina; Revolución Bolivariana.

ENG The change of elites in Venezuela during the first stage of the bolivarian revolution

Abstract: The political change that took place in Venezuela in the heat of the Bolivarian Revolution brought with it a modification in the correlation of forces and in the way in which the country's elites were configured, with the emergence of new power groups that modified the structure of the state, entering into direct conflict with the hegemonic corporations of the previous political period. Through the Constituent Assembly and a whole institutional operation, chavism managed to weaken the political parties of the elitist bipartisanism and subsequently promote the growth of companies and corporations that presented a line of action in line with the Bolivarian project. From a populist rhetoric of an antagonistic nature, Chávez was able to construct a -subject people- that opposed the project of the elites, thus assuming the risks inherent to this type of discourse: extreme social polarisation and the tendency towards hyper-personalist leadership. Nevertheless, the first years of his mandate were marked by economic development focused on the reduction of poverty and inequality, and the will to dynamise a national economy outside the interests of big capital and in favour of the social majorities left unprotected by the previous regime.

Keywords: Venezuela; chavism; elites; populism; state; Latin America, Bolivarian Revolution.

Sumario: 1. Introducción 2. El concepto de élite en el marco latinoamericano 3. Élites en Venezuela previas a la llegada de Chávez al poder 4. Proceso constituyente y consolidación de las nuevas élites 5. Conclusiones. Elementos en común entre las élites tradicionales y las élites emergentes 6. Bibliografía.

Cómo citar: García-Mayoral, A. (2024) "El cambio de élites en Venezuela durante la primera etapa de la Revolución Bolivariana". *Polít. Soc. (Madr.)* 61(1), e80976. <https://dx.doi.org/10.5209/poso.80976>

1. Introducción

Los países latinoamericanos han ofrecido a lo largo de los siglos xx y xxi importantes experiencias políticas que permiten aproximarse al fenómeno del populismo, como consecuencia directa de toda una tradición política e institucional que tiende a facilitar la aparición de liderazgos fuertes. Según autoras como Gratius (2007), el populismo es un fenómeno que encuentra su máxima expresión en Sudamérica, donde además representa una manera de hacer política, y a su vez, un reconocimiento cultural y el rescate de una identidad por parte de las masas. Así, la experiencia del chavismo es especialmente completa en tanto ofrece una posibilidad para el análisis del comportamiento del populismo en la oposición, al tiempo que sirve para estudiar este fenómeno desde el ejercicio del poder.

Por otra parte, Venezuela es un país donde han existido unas élites políticas y económicas fácilmente identificables, sobre las cuales se pueden rastrear los hábitos y modos de organización de los grupos oligárquicos en Latinoamérica. Así, el objetivo es examinar el fenómeno del chavismo en relación con las élites venezolanas, y observar de qué manera Hugo Chávez consiguió revertir la correlación de fuerzas interna y modificar las estructuras de poder.

Desde la famosa obra de Seymour Lipset y Aldo Solari, *Élites y desarrollo en América Latina* (1967), no ha habido un desarrollo especialmente intenso en esta área de conocimiento, reduciéndose mayormente a análisis pormenorizados de grupos oligárquicos concretos, pero sin existir una indagación más profunda y completa en esta cuestión. Del mismo modo, si bien en las últimas décadas ha habido un desarrollo verdaderamente notable del estudio sobre el populismo, no son muy numerosos los trabajos que enfocan este fenómeno desde un análisis sobre las élites, siendo estas un elemento clave en la retórica antagonista de los movimientos populistas.

Este tipo de discursos de carácter antagónico y conflictual propios de los movimientos populistas tienden a utilizar en su narrativa una identificación directa del líder con el pueblo, manifestando de esta manera la legitimidad de su movimiento en tanto se presentan como los representantes de la genuina voluntad de ese pueblo al que dicen representar. Así, en este trabajo se pretende abordar quién es ese —no pueblo— al que se contraponen, de qué manera se organiza y cómo articula su poder. Este enfoque puede ser interesante en un desarrollo posterior en tanto las élites en América Latina continúan aún concentrando gran poder del poder fáctico de las sociedades latinoamericanas. Se asocia a estos grupos con el escaso desarrollo de la región y, por tanto, se les considera responsables directos de la pobreza y desigualdad estructural de sus países. Con todo, se profundizará a lo largo del artículo sobre el comportamiento de estos grupos dominantes.

2. El concepto de élite en el marco latinoamericano

En primer lugar, resulta fundamental definir el concepto clave sobre el que gira este artículo, y trazar un recorrido histórico para comprender la dimensión temporal y espacial del término. Los estudios sobre las élites surgen a comienzos del xx de la mano de autores como Pareto, Mosca o Michels, quienes, preocupados por la deriva burocratizante que se estaba produciendo en Europa, buscaron identificar de qué manera ejercían el poder los grupos dominantes de comienzos de siglo. Desde ahí, autores críticos como Antonio Gramsci incluyeron elementos propios del marco teórico marxista para completar este análisis sobre las élites.

Vilfredo Pareto (1848-1923) define a la élite como el grupo dirigente que conduce una sociedad en tanto posee cualidades extraordinarias que le permiten mantener su estatus (Pareto, 1916). Pareto afirma que en todas las sociedades ha existido una clase gobernante, minoritaria, y otra gobernada más numerosa que consiente que exista esta primera (Pareto, 1916: 2244)¹. Divide la sociedad en dos estratos, el inferior o “clase no selecta”, y el superior o “clase selecta”. Esta clase superior tampoco es homogénea y distingue entre la clase selecta gobernante y la no gobernante (Pareto, 1916: 2034). En este estrato superior se incluyen ministros, diputados, senadores y en general, cualquier puesto político o militar con alta responsabilidad, poniendo el énfasis en la necesidad de la existencia de una oligarquía gobernante (Pareto, 1916: 2183).

La aportación más notable de Pareto al análisis sobre las oligarquías es su idea de “circulación de las élites”. Este concepto hace referencia a la necesidad de las élites de reciclarse para mantener su estatus. Según Pareto, si las élites limitan la movilidad y se vuelven cerradas, las posibilidades de su caída por medio de una revolución aumentan considerablemente. Para evitarlo, debe existir una tendencia donde, sobre todo en épocas de estabilidad y bonanza económica (Pareto, 1916: 2300), las élites tengan la capacidad de regenerarse por medio de los individuos más valiosos de los estratos inferiores (Pareto, 1916: 2058). Esta idea será clave en la historia reciente venezolana, en tanto que parte del éxito de la Revolución Bolivariana reside en la incapacidad de las élites previas al chavismo de regenerarse e incorporar las demandas de las clases populares.

En suma, Gaetano Mosca (1858-1941) desarrolla su teoría de las élites centrándose en la clase política, entendiendo que necesariamente ha de existir una clase gobernante y otra gobernada. La teoría de este autor responde a su preocupación por comprender la formación y organización de la clase política. Así, señala que “la tendencia de todas las clases políticas es hacerse hereditarias de hecho, cuando no de derecho, y por lo tanto a impedir un cambio, aunque sea parcial del personal político” (Mosca, 1984:

¹ El *Tratado de Sociología General*, de Vilfredo Pareto (1916), se compone de más de 2000 puntos que reflejan su teoría sociológica. Se citará por tanto cada uno de los puntos y no las páginas, como suele ser habitual.

20). Este autor incorpora en su teoría un factor clave en su explicación sobre cómo se constituyen y se mantienen las élites: la organización. La diferencia que encuentra Mosca entre la clase gobernada y la gobernante estriba en su capacidad organizativa. En ese sentido, Mosca advierte que “la fuerza de cualquier minoría es irresistible frente a cada individuo de la mayoría, que se encuentra solo ante la totalidad de la minoría organizada” (Mosca, 1984: 110).

Por último, los aportes del sociólogo alemán Robert Michels (1876-1936) son claves en tanto planteó su famosa “ley de hierro de la oligarquía”, al tiempo que definió qué entendía por élite y de qué manera esta se organizaba. Michels entiende que la democracia estaría en manos de una élite que opera de forma no democrática. Además, la existencia de élites y liderazgos contiene sus riesgos en tanto “con la institución del liderazgo comienza, como consecuencia de lo prolongado de la función, la transformación de los líderes en una casta cerrada” (Michels, 1979: 190). De esta manera, resalta Michels la importancia de que exista cierta movilidad dentro de la élite política, idea similar a la circulación de élites paretiana, señalando que los riesgos de la democracia residirán en su capacidad para liberarse de la “escoria aristocrática”, pues se considera necesaria cierta participación de las masas en la renovación de la democracia (Michels, 1979: 141). Con todo, para Michels el motor de las élites políticas es su mantenimiento en el poder y la lucha por este, en contradicción con los intereses genuinamente democráticos, lo que le lleva a concluir que “la organización política conduce al poder, pero el poder siempre es conservador” (Michels, 1979: 153).

Estos enfoques clásicos sobre las élites son claves a la hora de conceptualizar una idea central en ciencia política como es la de élites, y destacar así la importancia de su circulación y movilidad (Pareto), su formación u organización (Mosca) o su relación con la democracia (Michels). Si bien, es conveniente señalar que desde un enfoque marxista de las élites se critica el papel pasivo que otorgan estos autores al papel de las masas y la minúscula relevancia que señalan a la condición económica de los individuos que conforman las élites (Morán, 1993: 132).

Así, Antonio Gramsci (1891-1937) planteará algo parecido a una teoría marxista de las élites. En este análisis de los grupos dominantes, diferencia entre élites económicas y élites intelectuales, donde incorpora a la clase política (Gramsci, 1974: 389). Su aportación es clave al añadir la idea de que cuando una clase social se convierte en hegemónica “se crea al mismo tiempo y orgánicamente una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia con su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y político” (Gramsci, 1974: 388). Por último, Gramsci incorpora el elemento de la dimensión económica y del papel que ocupan las élites dominantes en la estructura social, en tanto estas son un reflejo de la clase hegemónica en ese tiempo histórico. Es decir, la legitimidad que obtienen las élites dominantes, para Gramsci proviene de su prestigio social y la confianza que obtiene de su posición en la esfera de producción (Gramsci, 1974: 394).

Profundizando ya en la realidad política latinoamericana, es necesario comentar ciertas particularidades que presenta esta región en relación con sus élites. América Latina contiene unas características propias que tienen que ver con lo histórico-cultural, que hace que se configuren un tipo de élites muy particular. Por una parte, es clave entender la dependencia de la exportación de *commodities*, que al ser el modelo económico de los países latinoamericanos, reproduce un tipo de élites muy asociadas a la posesión y control de estas materias primas, y por lo tanto están íntimamente ligadas al proceso de desarrollo en la región. De la mano de teorías sobre el desarrollo, se han realizado estudios sobre el comportamiento de las élites latinoamericanas. Señala Emilio Moya (2013), a raíz de la investigación pionera de Seymour Lipset, que el ethos y sistema de valores de las élites latinoamericanas:

Procederían de las instituciones y normas de las naciones ibéricas, que fueron sostenidas y practicadas por una elite de origen ibérico, apegada a la tierra y de carácter aristocrática, que fue absorbiendo a la burguesía industrial que iba emergiendo en la región.

A este respecto, Lipset reflexionaría sobre el débil desarrollo de América Latina, concluyendo con que este se debe fundamentalmente al papel que desempeñan las élites, y la manera en la que se articulan sobre un determinado ethos tradicional, bajo el que opera una preferencia del prestigio sobre el dinero, una escasa voluntad de inversión y asunción de riesgos, y la prioridad de intereses personales sobre los de la nación (Lipset, 1967). Así, Lipset acusa a las élites tradicionales latinoamericanas de no haber promovido una economía dinámica e inversora, dejándose llevar por redes aristocráticas y entregando a los intereses exteriores la suerte del desarrollo latinoamericano.

Así, en América Latina las élites “ejercen influencia sobre la estructura y el cambio de la sociedad o sobre sus diferentes esferas funcionales” (Hofmeister, 2007: 126). La particularidad de estas clases dominantes reside en que su capacidad de circulación y reciclaje es extremadamente baja, y su asociación con las estructuras estatales y con las grandes empresas es directa. Estas élites permanecen todavía muy presentes e influyentes y tienen sus raíces en la gran burguesía y en los latifundios del siglo XIX, siendo así su existencia y enorme poder incompatibles con una sociedad abierta y con principios democráticos (Hofmeister, 2007: 126-127).

Con todo, se observa que “la pertenencia a estos grupos elitarios aún es determinada en muchos casos por la procedencia y el poder económico, lo que tiene que ver sobre todo con la distribución desigual de ingreso y rentas” (Hofmeister, 2007: 127). Según este autor, las élites en América Latina han fracasado en su responsabilidad de, no solo modernizar, sino lograr un desarrollo razonable para la región. Así, gran parte de los elementos teóricos comentados sobre las élites pueden ser observados en la experiencia del cambio de élites venezolano en el periodo de 1992 a 2007.

3. Elites en Venezuela previas a la llegada de Chávez al poder

Históricamente, en Venezuela, desde que el petróleo se convirtió en el activo más importante de la economía venezolana, las diferentes élites políticas han permanecido de forma cercana a él. Con ello se constituye un tipo de estructura gubernamental que enlaza y somete a la clase política a la extracción, producción y exportación de petróleo, configurando un tipo de “petropopulismo” o populismo de Estado, que fortalece la relación de dependencia de la sociedad frente al Estado, trayendo como consecuencia la desestructuración casi total de las capas que conforman la sociedad civil (Vásquez, 2017: 11).

Así, esta interconexión entre el poder político y el control de la industria petrolera ha sido una tendencia continuada en los Gobiernos venezolanos, como en el caso de la dictadura de Pérez Jiménez, o incluso en los ya posteriores Gobiernos democráticos, que no pueden escapar de esta contradicción que produce “democratizar y promover la participación, al tiempo que se pretende controlar aspectos económicos y fortalecer una concepción rentista del Estado” (Vásquez, 2018: 157).

Esta institucionalidad y concepción de lo estatal configura un tablero político complejo de gestionar. Así, las alternativas a esta estructura económica y productiva se reducen notablemente como consecuencia de la profunda dependencia de los hidrocarburos. De este modo, la historia política y económica venezolana está caracterizada por la ausencia de procesos de diversificación económica que conviertan la estructura venezolana en menos dependiente del petróleo, debido a que el consenso y compromiso político que requiere este proceso, sumado al gran activo que suponen las reservas petrolíferas del país, hace que las élites gobernantes de turno se apoderen de manera discrecional de los recursos naturales del país con el fin de apuntalar su poder político (Vásquez, 2018: 166).

Por otra parte, el presidencialismo, presente en prácticamente toda América Latina, forma parte de una tradición institucional que tiende a reducir el grado de representatividad, elitiza y concentra el poder político y conduce parcialmente la economía nacional en favor de los grupos con más poder o afines a la presidencia. Esta ha sido la realidad institucional en Venezuela durante el siglo xx, comenzando por la dictadura de Juan Vicente Gómez a comienzos de siglo, y de aquellos que le sucedieron. Durante la etapa democrática del puntofijismo (1958-1998), el liderazgo personalista tuvo una menor dimensión; no obstante, el poder político presentaba un alto grado de centralización.

El régimen del Puntofijo² (1958-1999) se presentaba como un sistema democrático, donde existían elecciones libres y directas y el grado de libertades civiles era el más grande que había existido en la nación. Sin embargo, a efectos reales, este régimen estaba dominado por los partidos COPEI y Acción Democrática, excluyendo del tablero político y de los consensos mayoritarios al Partido Comunista de Venezuela y a diversos sectores de la población. Este régimen, en sus comienzos, fue capaz de dar estabilidad política, dio lugar a consensos interélites, a una alternabilidad gubernamental y a la incorporación de la población a los beneficios socioeconómicos del modelo de desarrollo (Kornblith, 2003: 161).

Sin embargo, estos dos partidos operaban de tal manera que a lo largo de cuatro décadas configuraron un sistema donde “los partidos políticos llegaban a ser los únicos canales para el ejercicio de la democracia, y los órganos indispensables para la formación de la voluntad estatal” (Brewer, 1988: 9). Así, sectores de la población cada vez más numerosos, desde campesinos a pequeños empresarios, pasando por estudiantes o el propio estamento militar, sentían que el sistema no era capaz verdaderamente de asimilar sus demandas, al tiempo que los datos macroeconómicos y sus consecuencias en la economía real eran cada vez más alarmantes al inicio de la década de los noventa.

En suma, los líderes de los partidos ejercían el control al decidir quién podía presentarse a los cargos públicos (Coppedge 1994: 20-22). La elección de los puestos en la Administración quedaba condicionada por la lealtad al partido que mostraran los sujetos interesados. Así, los líderes de estos partidos ejercían el control total restringiendo la elección popular a listas cerradas. Los votantes optaban por los partidos, no por los individuos, cuando acudían a las urnas para elegir a sus representantes en todas las instancias electorales, desde su municipio hasta los legisladores nacionales (Gates, 2014: 9).

Esto dificultaba la aparición de liderazgos ajenos a los partidos y la obtención de cargos políticos. Además, los miembros del Congreso de Venezuela no constituían el nodo central de poder dentro del propio partido, como tiende a ser habitual. Por contra, los representantes del Congreso solían votar según los dictámenes del partido y seguían las decisiones tomadas por los miembros de los comités ejecutivos centrales de sus partidos, la mayoría de los cuales no ocupaban cargos electos (Coppedge, 1994: 24). Esto se traduce en que los miembros del Comité Ejecutivo Central de los partidos tomaban las decisiones políticas de mayor calado.

Esta centralización del poder partidista hizo aumentar las relaciones con grupos de interés venezolanos, fomentando así la politización de estos mismos grupos. Estos, que deberían haber tenido un papel de contrapoder en un sistema político tan dominado por las ejecutivas de los dos grandes partidos, se vieron limitados en su capacidad de representar eficazmente los intereses de la sociedad por su falta de autonomía con respecto a aquellos (Gates, 2014: 11). Con todo, AD y COPEI penetraron profundamente en los grupos de interés y, así, redujeron su eficacia a la hora de agregar los intereses de aquellos en la sociedad a los que dichos grupos representaban (Coppedge 1994).

² Sistema político imperante en Venezuela desde el año 1958 hasta el 1999. Su origen fue tripartito (COPEI, AD y URD) pero de implementación factualmente bipartidista. Se inauguró bajo el Pacto del Punto Fijo en octubre de 1958. Durante décadas fue capaz de otorgar estabilidad al país por medio de un equilibrio entre poderes, pero su carácter elitista le llevó a sufrir un desgaste definitivo a partir de la década de los ochenta que se consumaría con la victoria de Chávez en el año 1998 y el posterior desmantelamiento del régimen. Al respecto de este periodo véase las obras de Bautista Urbaneja (2007) o Salamanca (1997).

Los líderes de estos partidos movilizaron el apoyo electoral vinculando a los trabajadores y a las clases populares de las zonas rurales con los partidos políticos. Por ejemplo, los líderes de AD promovieron ligas y sindicatos de campesinos mientras buscaban aumentar el apoyo público a su partido (Hillman, 1994: 81). Una vez que AD obtuvo el poder, ayudó a estas organizaciones a atraer miembros concediéndoles acceso a la toma de decisiones en el proceso político. Esta politización de los liderazgos se observa en otros colectivos. Al igual que representantes sindicales dependían de los partidos, líderes del movimiento estudiantil y de las asociaciones profesionales acabaron compitiendo en plataformas partidistas como el caso de CTV³, que fue menos propensa a las huelgas bajo las presidencias de AD, oponiéndose a los movimientos laborales que desafiaban las políticas del partido (Coppedge, 1994: 34).

También, se da en la Venezuela prechavista un fenómeno de interconexión de las élites políticas con las económicas, configurando una estructura clientelar de la mano de los grandes recursos económicos del Estado. El papel que desempeñaron empresas como FEDECAMARAS en el sistema de grupos de interés de Venezuela desacreditó a la democracia bipartidista. La inclusión formal de los principales miembros de la élite empresarial venezolana en la esfera política y la marcada influencia de los grupos de poder de varios sectores empresariales clave caracterizaron la estructura empresarial de Venezuela durante el régimen bipartidista (Gates, 2014: 14). Existió durante décadas una inmensa corrupción que afectó al sector privado tanto como a los líderes políticos, lo que facilitó el aumento del apoyo público a los opositores del sistema (Gates, 2010).

Esta vinculación de intereses privados con la actividad estatal creó una comunidad empresarial ansiosa por asegurar y retener el acceso al Estado, creando una red de influencia entre grupos de poder y partidos políticos (Gates, 2010: 85-110). Desde la regulación del sector financiero hasta las políticas sobre el tipo de cambio fueron ejemplos de la corrupción que vinculaba al sector empresarial y a los partidos gobernantes. Estos escándalos desacreditaban a las empresas y mostraban que la clase política era una élite que colocaba a los ejecutivos de las empresas en posiciones visibles de liderazgo, institucionalizando de esta manera la corrupción.

Las corporaciones vinculadas a la exportación de petróleo participaron intensamente de esta red de influencias. Venezuela fue el único país que permitió a las compañías petroleras extranjeras explotar su industria nacional durante décadas. Incluso después de su nacionalización en 1976, Petróleos de Venezuela (PDVSA) “nunca estuvo totalmente controlada por ninguno de los Gobiernos que la poseían técnicamente” (Parenti, 2006: 8). Los diferentes Gobiernos permitieron continuar a los antiguos ejecutivos de las grandes empresas petroleras a cargo de PDVSA. Estas decisiones desplazaron al Ministerio de Energía de la fijación de la política petrolera de Venezuela. Como resultado, la política petrolera fue establecida por gerentes venezolanos de PDVSA que fueron cultivados por grandes compañías petroleras como parte de su proyecto de legitimar una industria de propiedad extranjera, haciendo dudar por tanto al pueblo venezolano del verdadero compromiso de estas corporaciones para con los intereses de la nación (Tinker Salas, 2009).

Por otro lado, además de esta interconexión entre poderes políticos y económicos, existían también unas constantes interacciones entre los dos grandes partidos y otros poderes que configuraban el marco de las élites venezolanas del periodo puntofijista, como son la Iglesia o el Ejército. En primer lugar, con respecto al poder eclesial, su importancia en Venezuela no había sido tan determinante como en otros países de la región (Rey, 1991: 554). No obstante, desde 1958 se convirtió en un factor de apoyo moral al régimen democrático y fue objeto de consideración y deferencia por su parte, recibiendo ayudas económicas para tareas como el mantenimiento del culto u obras sociales y, en especial, para la educación católica (Levine, 2015).

Por otra parte, en lo que al orden ecuestre se refiere, uno de los objetivos del sistema democrático sería evitar los impulsos golpistas y autoritarios que habían sido característicos en épocas anteriores, y para ello se articuló todo un entramado constitucional y legislativo que tenía como objetivo reducir la participación política del Ejército únicamente a cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y la defensa (Rey, 1991: 554). Así, esta marginación del Ejército con respecto a las cuestiones civiles sería también uno de los elementos clave que precipitaría la caída del régimen puntofijista, en tanto se comenzaron a formar logias militares en el seno del ejército que tenían la voluntad de participar activamente en política, fundamentalmente a partir de la década de los ochenta, otorgándose a sí mismo la responsabilidad de tener que ser el “poder neutral” que garantice la participación efectiva y digna del pueblo.

Teniendo en cuenta toda esta estructura que algunos autores han dado en llamar semicorporativa⁴, una de las respuestas del puntofijismo ya en la década de los noventa fue la de descentralizar el poder político y convocar a elecciones regionales. Esta respuesta descentralizadora del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, ante la pérdida de apoyo y popularidad por las medidas de choque neoliberal, generó que “se ampliaran los espacios para la competencia inter e intrapartidista y se crearan oportunidades para el surgimiento de líderes individuales y de organizaciones políticas alternativas a los tradicionales” (Kornblith, 2003: 165). Esta descentralización cambiaría la política venezolana y sería eventualmente el epitafio de los dos grandes partidos, en tanto estos intentos democratizantes no fueron suficientes para evitar la llegada al poder de Hugo Chávez Frías en el año 1998.

³ Central sindical que nació con una identidad y vinculación puramente obrera, pero que sufrió un proceso de burocratización por su cercanía con AD, adoleciendo además de transparencia en su democracia interna (Rey, 1991).

⁴ Es el término que se utiliza por una serie de autores (Rey, 1991 y Bigler, 1981) para caracterizar a este tipo de régimen, en apariencia democrático y con garantías constitucionales propias del liberalismo político, pero con estructuras de manejo político articuladas para garantizar el sostenimiento del poder de los partidos políticos y de sus grupos de interés más afines.

4. Proceso constituyente y consolidación de las nuevas élites

Llegado Chávez al poder, hubo un desarrollo político e institucional que permitió la consolidación del proyecto chavista y generó la reacción de unas élites venezolanas que entendían que este nuevo régimen tenía potencialmente las características de convertirse en autoritario. Durante este periodo se produce una reestructuración del sistema político, fragmentado en dos polos irreconciliables. Chávez planteó los comicios presidenciales de 1998 en clave antagónica, donde los candidatos rivales representaban el continuismo y el proyecto de las élites, en contraposición a la candidatura del Polo Patriótico de Chávez, que encarnaba el cambio estructural que demandaba la sociedad civil.

Las categorías antagónicas que utilizaba Chávez en su discurso eran “el pueblo” y “las élites”. Así, el sujeto pueblo estaba conformado por sectores descontentos de la población y aquellos que habían quedado desprotegidos del bipartidismo anterior. Dentro de estos colectivos se incluían el Ejército, el movimiento comunista, los trabajadores sin estatus legal, trabajadores de pequeñas empresas de la economía formal que no contaban con organización sindical y la fuerza laboral proveniente del mundo rural (Ellner, 2011: 4). Con ello, el bloque opositor representaba el continuismo que dejaba fuera a estos grupos sociales mayoritarios, bajo la afirmación de Chávez de que ningún acuerdo entre élites ha favorecido los intereses de la mayoría.

Chávez, en sus inicios, encontró dentro de sectores de clases medias un relevante apoyo. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que las élites que eran objeto de los ataques discursivos de Chávez eran las élites políticas de Copei y AD, no tanto los grupos económicos que históricamente habían ido de la mano. Con ello, el objetivo prioritario de los primeros Gobiernos del chavismo consistía en dismantelar el sistema político anterior, apoyándose en un proceso constituyente con carácter fundacional que articulara una democracia popular y protagónica.

De esta manera, tras un largo proceso institucional de dudosa legalidad, se completaba el proceso de desaparición de las élites políticas del bipartidismo, que por otro lado no fueron capaces de articular una respuesta razonable ante su inminente desaparición. Así, el partido gobernante logró aprovechar la coyuntura política favorable para convertir su proyecto político en hegemónico. La capacidad movilizadora de Chávez, sumada a una utilización sombría de las instancias jurídico-administrativas del Estado, y unido a una desorganización e incapacidad de los partidos tradicionales para reaccionar, hizo que se consumara el proceso de sustitución de élites gobernantes en términos exclusivamente políticos. Así, “la vía electoral resultó altamente eficaz para legitimar en su origen a los nuevos ocupantes del poder, y el apoyo de la población actuó como pretexto para traspasar las barreras discursivas e institucionales habituales y forzar las barreras legales” (Kornblith, 2003: 181). Con todo, la legitimidad y apoyo popular estaba presente, y el “sujeto pueblo” encarnado por la figura de Chávez se convertía constitucional y discursivamente en el genuino soberano de Venezuela.

Gracias a ello construyó una relación directa con el pueblo, hasta tal punto que el MVR no era considerado por sus líderes como un partido político, sino como un movimiento popular (Gates, 2014: 24). Tras la reducción representativa de la oposición y con las élites de los partidos tradicionales prácticamente desaparecidas, Chávez hubo de reinventar su discurso identificando como élites a las oligarquías económicas de carácter nacional que operaban bajo los intereses de Estados Unidos, así como medios de comunicación privados. Este cambio de objetivo es propio de los movimientos populistas en tanto no pueden prescindir de la retórica del antagonismo, es decir, el espacio político debe permanecer fracturado (Villacañas, 2017: 72).

Aun así, es lógico que surgiera este enfrentamiento con las élites económicas, toda vez que aquellos que habían sido sus capataces políticos durante el régimen anterior habían desaparecido, y la oposición tuvo que articular una respuesta al Gobierno, esta vez procedente del sector empresarial y los medios de comunicación. En cualquier caso, existía en el proyecto chavista una voluntad totalizadora, bajo la cual el sujeto pueblo se identifica en tanto no pertenezca a la élite, configurando así una concepción del pueblo en sentido negativo. Así, progresivamente las élites pasaron a ser la clase dominante poseedora de grandes capitales y los medios de comunicación representados por el grupo empresarial FEDECAMARAS, que consideraban al Gobierno como ilegítimo desde prácticamente el comienzo y lanzaron una agresiva campaña contra su figura (Bull y Sánchez, 2020: 100).

Este nuevo escenario dio paso a una política confrontativa y de exacerbación de las diferencias, produciéndose un distanciamiento entre las fuerzas y grupos asociados a los poderes emergentes vinculados con el proyecto chavista y las élites tradicionales. Estas diferencias trascendieron al ámbito político e impregnaron las esferas económica, eclesiástica, militar, sindical, educativa o mediática (Kornblith, 2003: 181). Así, se produjo la reacción de grupos empresariales, medios de comunicación, sindicatos no afines al poder o la propia Iglesia católica ante el intento de Chávez de modificar la correlación de fuerzas interna del país de manera estructural. Si bien ciertos grupos de poder y medios de comunicación favorecieron el ascenso de Chávez, progresivamente fue perdiendo apoyo ante lo que se consideraba como un exceso de poder, fundamentalmente debido al recurso constitucional de la Ley Habilitante, que daba margen al presidente para gobernar mediante decretos, siendo este el motivo del inicio de las reticencias entre los grupos de poder y el presidente Chávez (López, 2011: 213).

En esta rearticulación de la oposición al chavismo que se dio tras la derrota de los partidos tradicionales, el primer grupo que se organizó contra Chávez fue el poder sindical. En las elecciones sindicales del año 2001, la oposición logró unos resultados favorables en términos absolutos, a pesar de que el oficialismo consiguió su objetivo de desplazar a los líderes existentes (Kornblith, 2003: 187). El sindicato CTV fue un agente clave que participó en el golpe de Estado de abril de 2002, descontento entre otras cosas por la inspección del Gobierno en los procesos electorales internos del sindicato, lo que generó un rechazo hacia Chávez por

parte de su presidente, Carlos Ortega, uno de los agentes opositores más activos durante estos primeros años de gobierno, bajo presunta financiación del Gobierno estadounidense.⁵

En 2002, las fuerzas opositoras al chavismo articularon un golpe de Estado⁶. Este grupo golpista estaba liderado por la agrupación empresarial FEDECAMARAS, y contaba con el apoyo de la CTV, la Iglesia católica y los medios de comunicación privados, más allá de ciertos miembros de la oposición política. Desde el Gobierno se había producido un creciente proceso de exclusión de estos grupos en su objetivo de invertir la correlación de fuerzas. Esta marginación se producía por medio de la creación de nuevas organizaciones “paralelas” (Ellner, 2008: 147), promovidas por el sector más duro del chavismo. Una vez que el grupo FEDECAMARAS articuló el golpe de Estado, se hizo más fuerte este convencimiento de organizar grupos de poder alternativos a los del bipartidismo anterior.

En torno a los años 2002 y 2003 la polarización política y la presión de los grupos de poder hacia el chavismo era total y absoluta. Tras el golpe de Estado fallido de abril del 2002 y con Chávez cerca de perder la presidencia en favor de Pedro Carmona, presidente de FEDECAMARAS, Chávez pidió a los sectores golpistas que reflexionaran, al tiempo que planteaba que desde su gobierno se debía hacer una autocrítica y analizar el porqué del descontento de estos grupos sociales y económicos. Tras este golpe, el Gobierno optó por un ahondamiento en la dimensión popular de su movimiento, después de que los chavistas “de base”, aquellos sin vínculos orgánicos con el MVR, resultaran fundamentales para detener el golpe de Estado (Ellner, 2008: 180)⁷.

Así, los líderes que habían dirigido la intentona golpista fueron detenidos o se vieron obligados a exiliarse, reestructurándose las dirigencias y liderazgos de estos grupos, que progresivamente irían optando por una estrategia política menos confrontativa. Tras estos sucesos, el Gobierno intensificó sus esfuerzos por contrarrestar la gran influencia de FEDECAMARAS dentro de la oposición, y decidió fomentar un nuevo sector empresarial, que tendría como actor principal la corporación de FEDEINDUSTRIA (Gates, 2014: 28). Esta corporación, junto con otras cooperativas financiadas por el Gobierno, empresas cogestionadas por los trabajadores y la dirección, fueron los organismos sobre los que Chávez construyó su proyecto económico alternativo al de los grandes capitales con vinculaciones extranjeras, en un afán proteccionista que favoreciera a las pequeñas y medianas empresas venezolanas, al tiempo que también se fundaría en el año 2003 el sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en oposición a la Confederación Venezolana de Trabajadores (CVT).

Tras este desplazamiento de los grupos económicos dominantes, estos se encuentran ante la situación de que son incapaces de influir de manera decisiva en el devenir de la economía y en la toma de decisiones gubernamentales. Así, se vieron obligados a replantear su estrategia, en tanto pasaron de ser *insiders* del sistema a ocupar una posición de *outsiders* bajo el chavismo (Gates, 2014: 29). Los actos de movilización e intentos de toma del poder por vía no democrática llevados a cabo por FEDECAMARAS contribuyó también a generar cierto escepticismo respecto a la civilidad de estos grupos económicos y su verdadero compromiso para con la democracia (Gates, 2014: 30).

De esta manera, se establece una diferenciación entre la burguesía tradicional ligada al capital extranjero, que representaba FEDECAMARAS, y determinados capitales productivos locales que se ligarían a corporaciones como FEDINDUSTRIA (Grimaldi, 2018: 203). Así, seguiría Chávez una línea coherente para con su proyecto político en tanto al tiempo que modificaba la estructura económica de poderes y reducía el poder de FEDECAMARAS, se favorecía el crecimiento de un tipo de empresas más pequeñas, ahondando en la idea de un mercado socialista, que incluyera al sector privado, pero subordinado a las leyes y al interés general⁸.

Sin embargo, a finales del año 2002 se produce un paro petrolero que de nuevo tiene a los dirigentes de FEDECAMARAS como principales instigadores, uniéndose tanto la CTV como PDVSA a este movimiento. En cualquier caso, el objetivo de FEDECAMARAS y de los participantes del paro era la convocatoria a elecciones y no la toma del poder, como en otras ocasiones (Grimaldi, 2018: 216). Este paro no tuvo un éxito contundente, ya que por ejemplo el entorno empresarial de FEDEINDUSTRIA permitió la libre elección a los trabajadores de asistir o no a la huelga, decidiendo la mayoría de los trabajadores acudir a sus puestos de trabajo por una cuestión productiva. Tras esta convocatoria fallida, los líderes de FEDECAMARAS se renuevan y comienza un progresivo abandono de la acción directa, y se opta por una estrategia democrático-institucional (Grimaldi, 2018: 219).

Con ello, FEDEINDUSTRIA se convertiría a partir del 2003 en una corporación relevante dentro del sector empresarial, a pesar de que su estructura era más débil y concentrada en el área de influencia de Caracas, a diferencia de FEDECAMARAS, que tenía una disposición transversal a lo largo del país y contaba con una vinculación extranjera más potente (Grimaldi, 2018: 207-208). Sin embargo, el papel que jugó FEDEINDUSTRIA

⁵ Durante las presidencias de Chávez en el poder, estuvieron marcadamente presentes las acusaciones de participación de opositores venezolanos con los Gobiernos estadounidenses, articulando en torno al Ejército y la inteligencia una estrategia común que conectaba la seguridad exterior con la interna.

⁶ El intento de golpe de estado de abril de 2002 por parte de los sectores más radicalizados de la oposición supone un punto de quiebre en la relación entre los grupos empresariales y actores económicos con el poder político. Su fracaso tensionó hasta el extremo las relaciones pero generó a medio plazo una aceptación mutua que permitió consolidar el poder del chavismo y permitir el desarrollo razonable de medios de comunicación y empresas opositoras. Véase Bautista Urbaneja (2007) o López Maya (2002).

⁷ A este respecto, la literatura acerca del intento golpista de abril de 2002 señala la importancia capital que tuvo el fiscal general Isaías Rodríguez, que explicó elementos constitucionales que fortalecieron la legalidad y legitimidad del presidente Chávez (Hoever, 2013).

⁸ Palabras de Chávez en la entrevista documental “Presidentes de América Latina – Hugo Chávez Frías. 2010.

en el cambio de élites empresariales del país fue limitado por su dificultad para ser un actor influyente, sumado al hecho de que dicha corporación tenía cierta autonomía y es importante no concebirlo como un grupo empresarial al servicio del poder político. Sus propuestas y hoja de ruta eran la defensa de los intereses del empresariado perteneciente a la pequeña burguesía venezolana que, por su condición de tal, aparece enfrentada a aquellas entidades donde aparecen representados los capitales medianos y grandes (Grimaldi, 2018: 222).

Por otra parte, esta democracia protagónica que Chávez pretendió implementar tras su llegada al poder precisaba de instancias sociales, que operaran al margen de la estatalidad, pero que participaran del proceso de construcción de un modelo socialista. Ejemplos de ello fueron los círculos bolivarianos, las unidades de batalla electoral o, en una fase posterior, los consejos comunales. Estas organizaciones fueron herramientas útiles de movilización social y electoral, al margen de la lógica partidista de la política institucional (Álvarez, 2007). Este tipo de estructuras informales fueron un importante activo en el primer Gobierno de Chávez, en ese intento del presidente por construir un sistema político antiliberal y anticapitalista (Álvarez, 2007), donde la soberanía nacional emanara directamente del poder popular. Asimismo, esto permitía consolidar un modelo político al margen del partidismo, el cual se encontraba intensamente desacreditado por la opinión pública, hasta el punto que la Constitución de 1999 no hablaba de partidos políticos, sino de “organizaciones con fines políticos”, una categoría que no estaba presente en la tradición política del país (Álvarez, 2003), pero que pretendía dar respuesta al profundo descrédito hacia los partidos.

Otro de los grupos empresariales que tuvo una gran relevancia en el devenir político y económico de la nación venezolana es Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta empresa, de titularidad pública había gozado de autonomía durante los Gobiernos del puntofijismo, en tanto los gerentes y miembros de la dirección no eran designados por el poder político, y así no dependían del Ministerio de Energía, lo que generaba una élite alternativa que controlaba una gran parte del financiamiento venezolano.

El Gobierno trató de controlar la toma de decisiones y la gestión de la industria petrolera desde el interior de PDVSA, por medio del Ministerio de Energía, para así generar un mayor control político del sector estratégico petrolero. Además, se trató de aumentar la participación gubernamental en los ingresos del petróleo por medio de aumentos de los impuestos sobre los beneficios, y se restringieron las nuevas inversiones privadas en la industria (Lander y López-Maya, 2002: 22). Así, el Gobierno aumentó el control y sometió a la industria petrolera a los intereses generales del país, utilizando los recursos derivados de este sector en los proyectos políticos y sociales del chavismo.

Así, se produjo una sustitución de la dirección de la empresa en 2002, a pesar del rechazo de los mandos intermedios a estos cambios. Estos mandos participaron en la huelga general de abril de 2002 y también participarían en el paro general convocado por las empresas y por los sindicatos en diciembre de 2002 (Parenti, 2006: 9). Tras estos sucesos, el Gobierno despidió a una gran cantidad de estos mandos intermedios de PDVSA, y tras este movimiento, se comenzaron a nombrar para la junta directiva miembros más afines al proyecto político chavista.

En suma, estas luchas por el poder fáctico de Venezuela tuvieron a los medios de comunicación como agente clave que desempeñaba gran parte de la actividad y del debate político. La presencia en los medios fue tremendamente activa tanto por parte del Gobierno y las fuerzas oficialistas, como de la mano de una oposición política y económica que controlaba la mayor parte de los medios de comunicación de titularidad privada. En América Latina se observa claramente cómo existe una relación de tensión constante entre los líderes de Gobiernos de izquierda y los medios de comunicación privados, excediéndose por un lado el poder político en cuestiones ligadas a la libertad de expresión, y, por otro lado, los medios de comunicación en su activismo político y labor de oposición directa y frontal.

Por ejemplo, los sucesos del golpe de Estado de 2002 fueron mediatizados, hasta tal punto que ciertos medios promovieron este golpe, incluso en las imágenes y reacciones a los sucesos, diversos periodistas y personas influyentes de la oposición venezolana agradecían a los grupos Venevisión, RCTV, Televén o Globovisión por el activismo permanente y la actitud beligerante contra el Gobierno. Todo ello finalmente desembocó en la salida de Chávez del poder durante dos días, lo que mostró la capacidad de los medios de construir un relato que tuviera unas consecuencias políticas tangibles. Estos medios privados mostraron una total complacencia ante el nuevo y efímero Gobierno producto del golpe de Estado de abril (Briceño, 2003: 30).

La estructura de los medios de comunicación durante los primeros años de Gobierno de Chávez estaba marcada por un excesivo uso de cadenas por parte del presidente como manera de contrarrestar la cobertura de sucesos como los del 11 y 12 de abril, constituyendo de esta manera una narrativa insalvable de confrontación, en la que el poder político se encaraba al mediático, en una lucha por imponer cada uno de los bandos su propia visión de país (López, 2011: 211). Del mismo modo, durante el paro petrolero de finales de año, estos medios de comunicación saturaron el espacio informativo basando la cobertura en el conflicto petrolero, dejando al margen otras cuestiones de interés, con el objetivo marcado de agravar el conflicto político y reforzar el clima de polarización que se venía dando en el país (López, 2011: 211).

Así, “el poder mediático fue literalmente el espacio desde donde se daba la disputa política, y eso representa un cambio sustancial en las de por sí complejas relaciones entre poder político y medios de comunicación” (Cañizalez, 2004: 4); el poder privado manipulaba las informaciones y sesgaba el análisis político

en favor de sus intereses⁹, y Chávez copaba los medios públicos de comunicación por medio de sus alocuciones. De esta manera, fueron evidentes ciertas actitudes poco democráticas del Gobierno para con la libertad de prensa y expresión, mientras que, por otro lado, se ven acciones políticas de los medios “que muchas veces abandonan su papel de informadores para entrar en terrenos ajenos a su directa responsabilidad social” (Abreu, 2002).

En último lugar, pero posiblemente se trate del ejemplo que mejor explica el proceso de cambio de élites en Venezuela, encontramos el papel que jugaron las Fuerzas Armadas y el entramado militar en todo el proceso de la Revolución Bolivariana. Las relaciones cívico-militares son un aspecto clave en la literatura sobre la cultura política venezolana, por la tradición castrense que históricamente ha ido vinculada al país y por el papel que han jugado como supuestos defensores de la dignidad e integridad del pueblo venezolano. El ejército en Venezuela era percibido, sobre todo en este periodo de descrédito de las élites políticas, como un cuerpo disciplinado, estructurado y desvinculado de la élite corrupta que representaban los partidos políticos (Welsch y Carrasquero, 2000).

De esta manera, fue el Ejército la institución que salió reforzada del proceso de desintegración del puntofijismo, al aumentar su participación en la vida pública, hasta entonces restringida por la Constitución de 1961, que no permitía el voto al militar ni la posibilidad de que participara en las contiendas políticas, además de no poder emitir privada o públicamente manifestación de apoyo o rechazo por partido político alguno (Irwin y Langué, 2005). Se mantenía de esta manera una separación entre el sector civil y el militar, clave para garantizar la estabilidad democrática en un contexto regional donde las amenazas de golpes de Estado estaban constantemente presentes.

Sin embargo, tras la llegada de Chávez al poder, se dispusieron una serie de artículos constitucionales y otras leyes que promovían la participación política del Ejército. Estos cambios incluían la transformación de las Fuerzas Armadas en Fuerza Armada Nacional, creando de esta manera un solo mando; el planteamiento de la corresponsabilidad entre Estado y sociedad en materias de defensa y seguridad, así como la presencia formal de la Fuerza Armada en tareas de cooperación y seguridad interna, aumentando de esta manera su participación en el desarrollo nacional (Jácome, 2018). Por otro lado, el Ejército dejó de estar supervisado por el poder legislativo, por lo que quedaron en manos del presidente de la República una serie de funciones que condicionan las relaciones cívico-militares, como es el hecho de que es el mismo presidente el que tiene la potestad única de adjudicar los ascensos militares y los “pases de retiro”. De esta forma se fortalecieron las relaciones de lealtad entre Chávez y el resto del Ejército y aumentó el compromiso del sector militar con la Revolución Bolivariana.

En ese sentido, el nuevo modelo social y político requería de una reestructuración también a nivel militar para que el Ejército fuese partícipe del proceso de transformación social con su presencia en instancias que tradicionalmente habían estado representadas por la sociedad civil. Con ello, la recomposición del poder militar se entiende como fundamento último del proceso revolucionario y de la nueva institucionalidad propia del chavismo (Salamanca, 2003, p.148). Además, a partir de los sucesos de 2002 y 2003, en los que el Ejército fue un activo clave para el mantenimiento del chavismo, se acentuó su protagonismo y se reforzó la lógica militarista en el funcionamiento de la Administración pública (López-Maya, 2008). Esta presencia pública militar responde, a su vez, a una visión nacional-desarrollista, presente en Venezuela desde Pérez Jiménez, y que concibe el Ejército como un potencial actor político que favorece el desarrollo nacional (López-Maya, 2008).

5. Conclusiones. Elementos en común entre las élites tradicionales y las élites emergentes

A modo de conclusión, desde la perspectiva de este trabajo se reivindica una visión acerca de la estructura política y económica de Venezuela que conviene rescatar. Este enfoque plantea que existen elementos que se han mantenido perennes con el devenir de las décadas en la cultura política e institucionalidad venezolana que invitan a pensar que las diferencias entre los sistemas políticos venezolanos no han sido tan grandes como sugerirían los análisis teóricos. Desde las dictaduras militares hasta los regímenes híbridos personalistas, pasando por democracias elitistas, han existido prácticas políticas y hábitos que apenas han cambiado a pesar de las distintas estructuras constitucionales.

En primer lugar, tanto el régimen chavista como el sistema de Punto Fijo presentan un sistema de inclusión y exclusión selectiva; un sistema igualmente “estructurado en torno a redes de acceso y lealtad privilegiados” (Buxton, 2011). Es decir, ambos sistemas presentan un sesgo, que se diferencia según a qué segmentos de la sociedad están orientados sus proyectos. El chavismo tendría una voluntad de incorporación de las clases subalternas, medianos y pequeños empresarios, el sector militar o los trabajadores rurales, mientras que la democracia puntofijista satisfacía los proyectos inversionistas de los grandes capitales para dinamizar la economía nacional. Sin embargo, la manera de articular esta exclusión del grupo “antagónico” era notablemente similar.

Por otra parte, se observa en ambos regímenes una importante politización de los grupos de interés empresariales y económicos de la nación venezolana, vinculando así los poderes económicos con los poderes

⁹ Tras los sucesos de abril de 2002, en los que los medios de comunicación jugaron un papel determinante, se procedió al cierre de Radio Caracas Televisión, un hecho que generó controversias y polarizó aún más la dinámica social venezolana. Ciertos sectores consideraron este acto como un ataque directo a la libertad de prensa, mientras que otros grupos planteaban que acciones de este tipo eran necesarias para proteger la democracia en el país. Al respecto del papel de los medios en estos sucesos, véase Quintero Valdés (2012) o Correa y Cañizalez (2006).

políticos. Esta politización, vinculada al poder de los partidos, ha tenido lugar también en el régimen bolivariano a pesar de una presencia menor de la partidocracia. De este modo, la corrupción ha sacudido la política venezolana, debido fundamentalmente a una falta de orden, compromiso y responsabilidad política y ciudadana para con la gestión de los ingentes recursos provenientes de la renta petrolera, por lo que apareció la corrupción de forma intensa entre los funcionarios estatales.

En otro sentido, el régimen bipartidista del Puntofijo creó toda una red y comunidad empresarial dependiente de la actividad estatal, de la misma manera que lo hizo el chavismo, con las diferencias de la vinculación de las élites tradicionales a los grandes capitales y la relación de las corporaciones de pequeños burgueses con el chavismo. Esta boliburguesía incluye además otro tipo de empresas relacionadas con otros sectores estratégicos claves como la construcción o la banca, siendo estos dos grupos de poder claves independientemente del sistema político de turno.

El último de los elementos de continuidad que es fácilmente detectable a lo largo de toda la historia política de Venezuela a partir del siglo xx es la ya advertida dependencia de la extracción y exportación de petróleo. El modelo económico de Venezuela, que sentó sus bases a comienzos del siglo xx, ha sido un modelo de Estado petrodependiente incapaz de generar riquezas alternativas (Vásquez, 2020). Así, esta petrodependencia explica la capacidad de diversos Gobiernos venezolanos de hacerse con el poder y mantenerlo a costa a fin de crear una estructura clientelar en torno al petróleo, pero sin crear un Estado y una economía fuerte que no esté condicionada por el precio de este (Vásquez, 2020).

En definitiva, se observa la dificultad de modificar las bases estructurales de un Estado con un sistema productivo tan dependiente de sus características fijas. Por un lado, está la conveniencia o no de la presencia de empresas privadas que dinamicen el sector petrolero, a costa de retirar capitales al extranjero. Por otra parte también se encuentra la disyuntiva sobre si invertir en otros sectores productivos para construir un modelo industrial o de servicios más diversificado o, por el contrario, proteger el sector petrolero y trabajar en su mejora y crecimiento. Estos son los debates estructurales a los que se han de enfrentar los dirigentes políticos al mando del complejo Estado venezolano, donde, como sucede en general en Latinoamérica, los proyectos políticos poseen una dimensión antagónica en tanto los intereses de las mayorías sociales tienden a estar en contradicción con los de las élites, o viceversa. Además, como se ha visto, la presencia tan activa del sector militar en la institucionalidad latinoamericana genera como consecuencia un tipo de cultura política que complejiza profundamente las relaciones Estado-sociedad civil.

Sería una demanda más que razonable aspirar a que las élites económicas, militares y mediáticas de Latinoamérica tuvieran un proyecto de carácter soberano, nacional e integrador, y que fueran progresivamente abandonando su dependencia de Estados Unidos, comprometiéndose firmemente para con el desarrollo de sus naciones. Más aún teniendo en cuenta que un desarrollo y crecimiento interno equitativo e inclusivo beneficia también al empresariado, que vería cómo se dinamiza la economía nacional, se reduce la pobreza y la violencia, y de esta manera se atrae una mayor inversión que haga crecer y diversificar la economía.

Este es otro de los grandes debates que existe en la región acerca del modelo productivo que se pretende articular. Este debate es puramente político, en tanto el Estado, como actor central en la economía, ha de ser responsable del proceso de construcción del modelo económico de la nación. El extractivismo y la exportación de materias primas es un modelo económico dependiente de contingencias externas y dificulta el desarrollo continuado y constante de la región, más aún en un escenario de crisis ecológica donde estas prácticas comienzan a ser incompatibles con el respeto medioambiental.

En América Latina, la región más desigual del mundo, es imprescindible una acción estatal enfocada en el desarrollo nacional, creando una institucionalidad fuerte que impida la presencia de élites cerradas que permanezcan cercanas al poder económico, para así hacer frente al mal endémico de la corrupción. En el caso de que el chavismo hubiera sido capaz de evitar la corrupción galopante en el seno de PDVSA, y hubiera invertido de manera diversificada los beneficios petroleros, probablemente su gestión económica hubiese sido analizada desde estándares positivos, en tanto es innegable la preocupación y el compromiso de la Revolución Bolivariana para con la reducción de la pobreza y la desigualdad, quedando a la vista los datos económicos previos a la situación de profunda y compleja crisis económica, política y social que atraviesa en la actualidad.

6. Bibliografía

- Abreu, I. (2002): *Chávez y los medios de comunicación social*, Caracas, Alfa.
- Álvarez, Á. E. (2003): "De la hegemonía partidista a la democracia sin partidos", *Politeia*, 30, pp. 75-93.
- Álvarez, Á. E. (2007): "Venezuela 2007: los motores del socialismo se alimentan con petróleo", *Revista de ciencia política (Santiago)*, 27, pp. 265-289.
- Bautista Urbaneja, D. (2007): *La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días*, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello.
- Brewer, A. R. (1988): *Problema del Estado de Partidos*, Caracas, Editorial Jurídica venezolana.
- Briceño, J. C. (2003): "Hugo Chávez y los medios de comunicación: la guerra 'hiperreal' venezolana Hugo Chávez and the Media: The Hyperreal Venezuelan War", *Historia y comunicación social*, 8, pp. 21-34.
- Bull, B. y F. Sánchez (2020): "Élites y populistas: los casos de Venezuela y Ecuador", *Iberoamericana-Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 49(1), pp. 96-106. <http://doi.org/10.16993/iberoamericana.504>
- Buxton, J. (2011): "Foreword: Venezuela's Bolivarian Democracy", en D. Smilde ed., *Venezuela's Bolivarian Democracy*, Durham, Duke University Press, pp. 9-23. <https://doi.org/10.1515/9780822394310-001>

- Cañizález, A. (2004): "La prensa en el referendo venezolano", *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (87), pp. 4-12. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i87.293>
- Cañizález, A. y C. Correa (2006): *Venezuela: Situación del derecho a la libertad de expresión e información. Informe 2005*, Caracas, Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Ellner, S. (2011): "Política y movimientos sociales en Venezuela: El movimiento dirigido por Hugo Chávez y los mitos del Populismo radical", *Aletheia*, 2, pp. 1-17.
- Gates, L. C. (2010): *Electing Chávez: The business of anti-neoliberal politics in Venezuela*, Pittsburgh, University of Pittsburgh.
- Gates, L. C. (2014): "Interest groups in Venezuela: lessons from the failure of a 'Model Democracy' and the rise of a Bolivarian democracy", *Journal of Public Affairs*, 14 (3-4), pp. 240-253. <https://doi.org/10.1002/pa.1410>
- Gramsci, A. (1974): *Antología (Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán)*, Madrid, Siglo XXI editores.
- Gramsci, A. (1984): *Cuadernos de la Cárcel*, t. 3. México D. F., Era.
- Gratius, S. (2007): "La 'tercera ola populista' de América Latina", *FRIDE*, 45(2), pp. 1-23.
- Grimaldi, N. E. (2018): "Empresarios frente al Chavismo, Un estudio de las corporaciones empresariales en Venezuela (2002-2008)", *Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos*, (7), pp. 199-227.
- Hillman, R. (1994): *Democracy for the privileged: Crisis and transition in Venezuela*, Boulder, Lynne Rienner Publishers.
- Hoeber, I. N. (2013): "Venezuela 2002. El golpe de Estado como instrumento político a principios del siglo XXI", en A. Ugalde, ed., *América Latina en la turbulencia global: Oportunidades, amenazas y desafíos*, Bilbao, UPV, pp. 315-329.
- Hofmeister, W. (2007): "Las élites en América Latina: un comentario desde la perspectiva de la cooperación para el desarrollo", *Biblioteca Iberoamericana*, 2, pp. 125-135.
- Irwin, D. y F. Langue (2005): *Militares y poder en Venezuela: ensayos históricos vinculados con las relaciones civiles y militares venezolanas*, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello.
- Jácome, F. (2018): "Los militares en la política y la economía de Venezuela", *Nueva sociedad*, 274, pp. 119-128
- Kornblith, M. (2003): "Del puntofijismo a la Quinta República: Elecciones y democracia en Venezuela", *Colombia internacional*, 58, pp. 160-194.
- Laclau, E. (2012): *La razón populista*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- Lander, L. E., y M. L. Maya (2002): "Venezuela, golpe y petróleo", *Revista de la OSAL*, 2, pp. 1-4.
- Levine, D. H. (2015): *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton, Princeton University Press.
- Lipset, S. M. (1967): "Élites, educación y función empresarial en América Latina", en S.M. Lipset y A.E. Solari, eds., *Elites y desarrollo en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones Paidós, pp. 15-70.
- López, G. (2011): "Chávez versus medios. ¿Una batalla simbólica?", *Politeia*, 34(46), pp. 209-227. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i112.305>
- López Maya, M. (2002): "El golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela y sus causas", *Sociedad y economía*, 3, pp. 3-11.
- López Maya, M. (2008): "Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 14(3), pp. 55-82.
- Michels, R. (1979): *Los partidos políticos, vol. I y II*, Buenos Aires, Amorrortu.
- Morán, M. L. (1993): "La teoría de las élites", en F. Vallespín, ed., *Historia de la teoría política*, 5, Madrid, Alianza, pp. 132-188.
- Mosca, G. (1984): *La clase política. Selección de Norberto Bobbio*, México D. F, FCE.
- Moya, E. (2013): "Entre la espada y la pared, Los discursos sobre la élite política en el contexto de la globalización. Un estudio de tres casos, Chile, Argentina y México", *X Jornadas de Sociología*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales UBA.
- Parenti, C. (2006): "Venezuela's revolution and the oil company inside", *NACLA report on the Americas*, 39(4), pp. 8-13. <https://doi.org/10.1080/10714839.2006.11722341>
- Pareto, V. (1916): *Trattato di sociologia generale, (Vol. 2)*, Florencia, G. Barbèra.
- Rey, J. C. (1991): "La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación", *Revista de estudios políticos*, 74, pp. 533-578.
- Salamanca, L. (1997): *Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela*, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV.
- Salamanca, L. (2003): "La sociedad civil venezolana en dos tiempos: 1972-2002", *Politeia*, 30, pp. 119-156.
- Salas, M. T. (2009): *The enduring legacy: Oil, culture, and society in Venezuela*, Durham, Duke University Press.
- Vásquez, M. E. (2018): "La herencia de la modernidad en la Venezuela del siglo XXI: estados híbridos y fetichismo constitucional", en J. L. Villacañas y C. Ruiz Sanjuán, eds., *Populismo versus Republicanismo. Genealogía, historia, crítica*, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 155-175.
- Vásquez, M. E. (2020): "Caudillismo 'gocho' y el inicio de la petrodependencia venezolana: 1908-1935", en J. L. Villacañas y J. Maisó, eds., *Laboratorio Weimar: La crisis de la globalización en Euroamérica (1918-1933)*, Madrid, Tecnos, pp. 563-577.
- Villacañas, J. L. (2017): *Populismo (Vol. 1)*, Madrid, La Huerta Grande.
- Welsch, F. J. y Carrasquero, J. (2000): "Perceptions of state reform in Latin America", *International Social Science Journal*, 52(163), pp. 31-38.

